

N° 3057

Fuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional

Gaceta N° 218 de Viernes 23-11-18

CLIC EN LETRAS O NÚMEROS EN CELESTE PARA ABRIR

ALCANCE DIGITAL N° 199. 23-11-2018

[Alcance con firma digital](#) (ctrl+clic)

PODER LEGISLATIVO

LEYES

LEY 9610

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA RESERVA BIOLÓGICA LOMAS DE BARBUDAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS

PROYECTOS

EXPEDIENTE N.° 20.693

LEY DE EMPLEO PÚBLICO

EXPEDIENTE N° 20.758

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1990

EXPEDIENTE N.° 20.767

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)

EXPEDIENTE N.º 21.012

LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO

EXPEDIENTE N.º 21.024

LEY PARA RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

EXPEDIENTE N.º 21.025

REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DE VIH

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N° 41353-H

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° 41390 –COMEX

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 400-2018 (COMIECO-LXXXIII) DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, QUE APROBÓ "LA ADOPCIÓN DE LOS PÁRRAFOS 3 Y 4 DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN N° 22-98 (COMIECO-VIII), DEFEC/W 31 DE MARZO DE 1998, POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, A PARTIR DEL 1 ° DE ENERO DEL MÍO 2029, LOS CUALES SE APLICAN A LAS REGLAS DE ORIGEN CONTENIDAS EN EL ANEXO 2 DE DIE/TA RESOLUCIÓN"

DECRETO N° 41396 – COMEX

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 397-2018 (COMIECO- LXXXIII) DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, QUE APRUEBA PARA PANAMÁ "LA I11C01PORACIÓ11 DE W1 GRUPO DE INCISOS ARANCELARIOS EXCEPTUADOS EN EL ANEXO 5.2 DEL PROTOCOLO DE /11C01PORACIÓN, QUE FORMAN PARTE DE LA PARTE I DEL ARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACIÓN, ANEXO 'A' DEL CONVENIO ARANCELARIO Y ADUANERO CENTROAMERICANO, EN LA FORMA QUE APARECEN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCION Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA

DECRETO N° 41353 – COMEX

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° 09-2018 (CEJE) DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, QUE APRUEBA "INCORPORAR AL LIBRE COMERCIO EN LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA, LAS GRASAS Y ACEITES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN N°331-2018 (COMIECO-LXVI), DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 EN CATEGORÍA ARANCELARIA DE EXCLUSIÓN QUE APARECEN COMO ANEXO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN, Y POR TANTO, ELIMINARLAS DEL

ANEXO "A" DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA", Y SU ANEXO.

DECRETO N° 41400 - COMEX - MEIC – MAG

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 401-2018 (COMIECO-LXXXIII) DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 Y SU ANEXO: "REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO RTCA 65.05.67:18 INSUMOS AGRÍCOLAS. INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO, PLAGUICIDAS QUÍMICOS FORMULADOS, SUSTANCIAS AFINES, COADYUVANTES Y VEHÍCULOS FÍSICOS DE USO AGRÍCOLA. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ETIQUETAS Y PANFLETOS"

LA GACETA

[Gaceta con Firma digital](#) (ctrl+clic)

PODER LEGISLATIVO

NO SE PUBLICAN LEYES

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N° 41271-MOPT

SERÁ DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA, EL USO COMO NORMATIVA TÉCNICA DE CONSULTA PERMANENTE Y APLICACIÓN, LOS MANUALES APROBADOS POR EL CONSEJO SECTORIAL DE MINISTROS DE TRANSPORTES DE CENTROAMÉRICA (COMITRAN)

DECRETO N° 41365-MOPT

REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CAUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 8131 "LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS"

DECRETO N° 41392-COMEX

PUBLICACIÓN DE LA DECISIÓN N° 12 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018

DECRETO N° 41398-COMEX-MEIC-S-MAG

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 396-2017 (COMIECO-LXXXII) DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y SU ANEXO, “REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO RTCA 67.04.72:17. PRODUCTOS LÁCTEOS. QUESOS NO MADURADOS, INCLUIDO EL QUESO FRESCO. ESPECIFICACIONES”

DECRETO N° 41399 -COMEX-H

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 393-2017 (COMIECO-LXXXII) DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y SU ANEXO: “DECLARACIÓN REGIONAL DE VIAJERO”

DECRETO N° 41404-MOPT

REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL PÚBLICO COLECTIVO REMUNERADO DE PERSONAS (TIPC)

DIRECTRIZ

DIRECTRIZ N° 028-P

DIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO SOBRE EL DISEÑO DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPLEABILIDAD DE PERSONAS TRANS

DOCUMENTOS VARIOS

- HACIENDA

N° DGT-R-056-2018

ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LAS OPERADORAS DE PENSIONES, DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL MONTO DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES DISFRUTADOS POR APORTES A REGÍMENES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

- AGRICULTURA Y GANADERÍA
- EDUCACIÓN PÚBLICA
- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
- JUSTICIA Y PAZ
- AMBIENTE Y ENERGÍA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

- AVISOS

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

- LICITACIONES
- ADJUDICACIONES
- REMATES
- FE DE ERRATAS

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO REGLAMENTO DE OBRA MENOR EN EL CANTÓN DE LA UNIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA PUBLICAR EN CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE EL “REGLAMENTO DE PROCESO DE SEGURIDAD VIAL Y VIGILANCIA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA”

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

REGLAMENTO INTERNO PARA EL INGRESO Y EL USO DEL CENTRO DE CUIDO DIURNO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN (CECUAM)

REGLAMENTO INTERNO PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

AVISOS

CORREOS DE COSTA RICA S. A.

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA CORREOS DE COSTA RICA S.A.

REMATES

- HACIENDA

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

- UNIVERSIDAD NACIONAL
- PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
- AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

REGIMEN MUNICIPAL

- UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
- MUNICIPALIDAD DE POÁS
- MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
- MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
- MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
- MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
- MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

AVISOS

- CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE INGENIEROS CIVILES

Estimado colega:

La Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Ingenieros Civiles de Costa Rica, tiene el gusto de dirigirse a Usted, para convocarle a la próxima: Asamblea General Ordinaria 01-2018-2019 A.G.O. Que se llevará a cabo en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el día 30 de noviembre del 2018, en primera y segunda convocatoria a las 7:00 a.m. y 7:30 a.m. respectivamente.

Orden del día

1. Comprobación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Conocimiento y Aprobación de Nuevos Miembros.
4. Conocimiento y Aprobación de los Informes.
5. Elección de puestos de Junta Directiva.
6. Asuntos Varios.

En espera de contar con su valiosa asistencia,

Ing. Carolina Maliaño Monge, Fiscal.—1 vez.—O.C. N° 476-2018.—Solicitud N° 133200.—
(IN2018294349).

- AVISOS

NOTIFICACIONES

- SEGURIDAD PÚBLICA
- HACIENDA
- JUSTICIA Y PAZ
- AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
- MUNICIPALIDADES
- AVISOS

FE DE ERRATAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo comunica que, en adición a la publicación realizada en *La Gaceta* N° 214 del lunes 19 de noviembre del 2018, sobre las Tarifas para los servicios que brinda el área de Urbanismo de este Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se añade lo siguiente:

Visado de Urbanización

Condominio-Conjunto Residenciales	Costo del servicio
Según el N° de FF-FFPI-Lotes-Viviendas Plano General de Catastro para Urbanizaciones y conjuntos residenciales	₡714.000,00

Rige a partir de su publicación.

M.Sc. Alonso Oviedo Arguedas, Encargado.— 1 vez.— (IN2018296941).

BOLETÍN JUDICIAL

[Boletín con Firma digital](#) (ctrl+clic)

SERETARIA GENERAL

CIRCULAR N° 110-2018.

ASUNTO: PROTOCOLO GENERAL DE IMPLEMENTACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA PENAL, PROTOCOLO PARA PERSONAS FACILITADORAS DE LA REUNION RESTAURATIVA Y PROTOCOLO DE REDES DE APOYO EN EL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA

SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
HACE SABER:

TERCERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015846-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece horas y seis minutos de diez de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, cédula de identidad 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 60 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Turrialba y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, el Alcalde de Turrialba y al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). El accionante aduce que la norma impugnada resulta contraria a los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, al establecer privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal impugnado establece la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de supresión del cargo, jubilación, fallecimiento o renuncia, por lo que a su parecer se superan los límites de lo que puede considerarse razonable y proporcionado. Adicionalmente, el artículo cuestionado reconoce el pago por auxilio de cesantía sin límite temporal, lo que contraviene lo dispuesto recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto acuden en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo,

claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Para notificar a: el Alcalde de Turrialba se comisiona la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Turrialba, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente./Fernando Castillo Víquez, Presidente a.i./.”
San José, 10 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018290684)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015847- 0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas y once minutos de diez de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declare inconstitucional el artículo 53 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Santa Ana -”La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones (preaviso y cesantía) de los trabajadores por cualquier causa por la que cesarán sus funciones, entre estas. A. Supresión de cargo. B. Jubilación. C. Fallecimiento. D. Despido con responsabilidad patronal en el caso de que no exista restitución al puesto. E. Renuncia Voluntaria. Por los anteriores conceptos tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario (auxilio de cesantía) por cada año de servicios prestados sin límite de años de manera que todos los casos el trabajador reciba por prestaciones un mes por cada año laborado. Tal indemnización se pagará con un plazo no mayor de quince días a excepción del punto c. Que se depositará en el Tribunal respectivo. Es entendido que la Municipalidad se obliga a presupuestar cada año las reservas necesarias para dar contenido económico a los conceptos precitados esta reserva no podrá ser variada para darle contenido económico a otros rubros”- por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política. Se

confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Ana y al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 53 impugnado -de forma desproporcionada e irracional-, establece la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de suspensión del cargo, jubilación, fallecimiento o renuncia. Adicionalmente, aduce que el artículo 53 de la Convención impugnado no establece un tope de cesantía, pese a que en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años; lo que contraviene lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por la tutela de intereses difusos al tratarse del manejo de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en

general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese.
/Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./.-».

San José, 10 de octubre del 2018.

Vernor Perera León
Secretario a. í.

O.C.N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018290685).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015849- 0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y treinta y uno minutos de diez de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad No. 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 44 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Santa Cruz, por estimarlo contrario a los derechos protegidos en los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz y al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 44 impugnado –de forma desproporcionada e irracional–, dispone que dicho instituto puede ser empleado por los trabajadores en caso de supresión del cargo, jubilación o fallecimiento. Adicionalmente, aduce que el referido artículo de la convención, reconoce un pago de cesantía sin límite de años, pese a que en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, el tope es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*,

por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Santa Cruz, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente.-/Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.

San José, 10 de octubre del 2018

Vernor Perera León

Secretario a. í

O.C.N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018290687).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015934- 0007-CO que promueve Sindicato Nacional de Enfermería, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y veintiocho minutos de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por H. Lenin Hernández Navas, portador de la cédula de identidad N° 1-967-277, en su condición de Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, cédula de persona jurídica N° 3-011-045082, para que se declaren inconstitucionales los artículos 375 y 376, inciso d), del Código de Trabajo, por estimarlos contrarios a los artículos 33 y 61 de la Constitución Política y a los principios de razonabilidad y de interdicción de la arbitrariedad,

así como a los Convenios Nos. 87 y 98 de la OIT y los ordinales 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se alega que la normativa impugnada es inconstitucional en tanto se prohíbe, de forma absoluta, el ejercicio del derecho a la huelga en el supuesto de los servicios públicos –como sería el caso de la CCSS–, pese que, en atención a los criterios emanados de la OIT, tal prohibición al ejercicio del derecho de huelga debe circunscribirse a aquellos servicios públicos sumamente calificados y, además, puede permitirse la huelga en tanto se garantice el funcionamiento mínimo de los servicios que prestan las instituciones públicas. Afirma, el accionante, que artículo 61 de la Constitución Política no dispone una prohibición total a la huelga en los servicios públicos, sino que contempla una reserva de ley, habilitando al legislador ordinario para determinar los servicios en los que la huelga se restringe o prohíbe. Por lo demás, en atención a los criterios emanados de la OIT, tal prohibición al ejercicio del derecho de huelga debe circunscribirse a aquellos servicios públicos sumamente calificados y, además, puede permitirse la huelga en tanto se garantice el funcionamiento mínimo de los servicios que prestan las instituciones públicas, como es el caso de la CCSS. Señala que, en conclusión, el derecho a la huelga debe restringirse, únicamente, a aquellos trabajadores que son absolutamente indispensables. Insiste que la OIT ha señalado que el mantenimiento del servicio mínimo constituye una solución idónea que, por una parte, salvaguarda el derecho de huelga de la mayoría de los trabajadores y, por otra parte, garantiza la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Manifiesta que, en consecuencia, son inconstitucionales las normas impugnadas en tanto se prohíbe de forma absoluta el derecho de huelga de los trabajadores que prestan sus servicios en la CCSS. También se acusa que la Administración, amparada en la ley laboral, ha incurrido en un uso abusivo de sus potestades, al englobar todas las actividades bajo el concepto de “servicio esencial”. Alega que con esto se infringen los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad. Reclama que hay una discriminación en perjuicio de todos los empleados de la CCSS, pues, aunque brindan un servicio importante, la ley ha sido un portillo para que la Administración realice una generalización sobre el concepto de “servicio esencial”, sin haber demostrado la idoneidad de tal determinación. Acusa que la normativa impugnada permite que, en definitiva, sean las instituciones y sus jefes quienes determinen, mediante actos administrativos (como, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 38767-MP-MTSS-MJP), cuales son los servicios esenciales. Acusa que, con esto, se infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad. Señala que el legislador dejó abierto un portillo peligroso para que la Administración decida –vía reglamentaria– cuáles servicios son esenciales, en infracción del derecho fundamental a la huelga. Alega que, en la especie, se está en presencia de un supuesto de “huelga política”; en cuyo caso, la OIT ha reconocido que este tipo de huelga, al igual que la huelga reivindicativa, implica el ejercicio de un derecho laboral y humano. Afirma que, no obstante, el Código de Trabajo no prevé ni regula la huelga política, por lo que los procedimientos laborales previstos en dicho cuerpo normativo resultan incorrectos e insuficientes para conocer de este tipo de asuntos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo

75, párrafo primero y segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto que el accionante cita como asunto base el proceso de calificación de huelga que se tramita en expediente No. 18-002813- 1178-LA en el que se invocó la inconstitucionalidad de la normativa impugnada y, adicionalmente, se constata la defensa de un interés corporativo de parte del sindicato accionante en resguardo del derecho a la huelga de sus miembros. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. respecto de los efectos jurídicos de la admisión de la acción de inconstitucionalidad. Ciertamente, a tenor del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se debe advertir a los “órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda, ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso”. Empero, en el caso concreto, la aplicación del ordinal 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional enervaría la aplicación de la norma en esos supuestos, causando graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social, respecto de un tema sensible donde confluye un evidente interés general, como lo es en el sub judice la realización de huelgas en los servicios públicos. Por lo expuesto, en aplicación del ordinal 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impone modular el efecto suspensivo del artículo 81 de ese cuerpo normativo, indicándose, expresamente, que no se suspende el dictado de ninguna resolución final ya sea en sede administrativa o jurisdiccional. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general. Notifíquese./Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.
San José, 17 de octubre del 2018.

Vernor Perera León

Secretario a. í

O.C N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018290688).

PRIMERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015822-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declare inconstitucional el artículo 57 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Goicoechea “El trabajador que desea dar por concluido su Contrato de Trabajo, o bien acogerse al régimen de Pensiones de la Caja

Costarricense del Seguro Social u otro existente, recibirá por concepto de auxilio de Cesantía, el pago de un mes de salario por cada año de servicios y fracción de seis meses de acuerdo a los siguientes porcentajes: a) 70% cuatro años de servicio a cinco años b) 80% seis años de servicios a siete años c) 90% ocho años de servicios a nueve años d) 100% de diez años y más en adelante. Tal indemnización la municipalidad la cancelará en un plazo no mayor de sesenta (60) días a excepción del punto c) que se depositará en el Tribunal respectivo”, por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, a la Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la provincia de San José. La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 57 impugnado-de forma desproporcionada e irracional, establece la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de que el trabajador quiera dar por terminado su contrato laboral o pensión. Adicionalmente, aduce que el artículo 57 de la Convención impugnado no establece un tope de cesantía, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años; lo que contraviene lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por la tutela de intereses difusos al tratarse del manejo de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse

quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.»

San José, 18 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291154).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015823- 0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y diecisiete minutos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 88 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Abangares, por estimarlo contrario a los derechos protegidos en los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al alcalde de la Municipalidad de Abangares y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Abangares (SITRAMAG). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 88 impugnado –de forma desproporcionada e irracional–, dispone que dicho instituto puede ser empleado por los trabajadores en caso de supresión del cargo, jubilación o fallecimiento. Adicionalmente, aduce que el referido artículo de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 20 años, pese a que en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2018- 8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción:

Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al alcalde de la Municipalidad de Abangares y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Abangares (SITRAMAG), ambos en las oficinas de la Municipalidad de Abangares, se comisiona a Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Abangares, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese.

San José, 18 de octubre del 2018

Vernor Perera León

Secretario a. í

O.C N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291155)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015839-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y cincuenta y tres minutos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 8, incisos d) y e), de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Cartago, por estimarlo contrario a los derechos protegidos en los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al alcalde de la Municipalidad de Cartago y al secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de la Provincia de Cartago (SUNTRAMUPC). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 8°, inciso d) impugnado de forma desproporcionada e irracional, dispone que dicho instituto puede ser empleado por aquellos trabajadores que voluntariamente deciden renunciar a su cargo. Adicionalmente, aduce que el artículo 8°, inciso e), de la convención, reconoce un tope de cesantía de hasta 25 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción,

en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al alcalde de la Municipalidad de Cartago y al secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de la Provincia de Cartago (SUNTRAMUPC), ambos en las oficinas centrales de la Municipalidad de Cartago, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poderjudicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente./Fernando Castillo Víquez, Presidente a. i./” San José, 18 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,

Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291156).).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015843-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y veintiocho minutos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 95 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad Nacional, por estimarlo contrario a los derechos protegidos en los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al rector de la Universidad Nacional y al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 95 impugnado -de forma desproporcionada e irracional-, dispone que dicho instituto puede ser empleado por los trabajadores en caso de renuncia, jubilación, incapacidad permanente, pensión o muerte. Adicionalmente, aduce que el referido artículo de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 20 años, pese a que, en el sector privado,

según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Viquez, Presidente a. í./»

San José, 18 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291157).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015461-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth y otro, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas y cuarenta y nueve minutos de

veintitrés de octubre del dos mil dieciocho. /Se da curso a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Gustavo Viales Villegas, portador de la cédula de identidad N° 6-393-601 (expediente N° 18-015461-0007-CO) y Otto Guevara Guth portador de la cédula de identidad N° 1-544-893 (expediente N° 18-015820-0007-CO), acumuladas mediante voto N° 2018-017270 de las 9:30 horas del 17 de octubre del 2018, para que se declaren inconstitucionales los artículos 24 y 45 de la Quinta Convención Colectiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por estimarlos contrarios a los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio presupuestario. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al gerente general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banco Popular (SIBANPO). El artículo 24 de la convención colectiva se impugna en cuanto otorga a los funcionarios del banco un subsidio o subvención, por un monto de 100,000.00 colones, en caso de que, contraigan matrimonio o por nacimiento de hijos o hijas. Afirman que esto supone el otorgamiento de un privilegio odioso, exclusivo, excluyente e injustificado, en razón de un hecho ajeno a cualquier consideración derivada de la relación laboral y que no se relaciona con los fines del banco. Aseveran que tal norma implica un uso abusivo de fondos públicos. Alegan que el artículo 45 de la citada convención colectiva también crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Argumentan, los accionantes, que el instituto jurídico del auxilio de cesantía, regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alegan que el ordinal 45 impugnado –de forma desproporcionada e irracional– dispone que dicho instituto puede ser empleado en caso de jubilación, renuncia, pensión o despido con justa causa. Adicionalmente, aducen que el artículo 45 de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 20 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirman que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2018-8882. Aseveran que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación de los accionantes proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersonan en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de

que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidentea. í./-».

San José, 24 de octubre del 2018.

Vernor Perera León

Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291158).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015843-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y veintiocho minutos de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 95 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad Nacional, por estimarlo contrario a los derechos protegidos en los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al rector de la Universidad Nacional y al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN). La norma se impugna por cuanto crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 95 impugnado-de forma desproporcionada e irracional, dispone que dicho instituto puede ser empleado por los trabajadores en caso de renuncia, jubilación, incapacidad permanente, pensión o muerte. Adicionalmente, aduce que el referido artículo de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 20 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la

Sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica en Ave. 7, calles 1 y 3, edificio 16. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./»

San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291159).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la ley de la jurisdicción constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015826-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y dieciocho minutos de veintidós de

octubre de dos mil dieciocho. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 22 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Carrillo, por estimarlo contrario a los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio presupuestario. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al Alcalde de la Municipalidad de Carrillo y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica (STMDECR). La norma se impugna por cuanto, a juicio del accionante, crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía, regulado en el ordinal 63 de la carta magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 22 impugnado –de forma desproporcionada e irracional– dispone que dicho instituto puede ser empleado por aquellos trabajadores que cesaren en sus funciones por supresión del cargo, jubilación o fallecimiento. Adicionalmente, aduce que el artículo 22 de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 17 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el código de trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el tribunal constitucional en la sentencia no. 2018-8882. Asevera que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la ley de la jurisdicción constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la ley de la jurisdicción constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la ley de la jurisdicción constitucional que disponen lo siguiente *“Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la procuraduría general de la república y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los Tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el procurador general de la república, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”*, *“Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”* Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la

aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y Conforme lo ha resuelto en forma reiterada la sala (Resoluciones N^{os}: 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, si no únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al Alcalde de la Municipalidad de Carrillo se comisiona al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo, Despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Fernando Castillo Viquez, presidente.

San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León

Secretario a. í.

O.C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291160).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015829-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y veintisiete minutos de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declare inconstitucional el artículo 22 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Vázquez de Coronado y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica, por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días a la Procurador General de la República, al alcalde de la Municipalidad de Vázquez de Coronado y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica. La norma se impugna en cuanto establece privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal impugnado establece la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de supresión del cargo, jubilación o fallecimiento, por lo que a su parecer se superan los límites de lo que puede considerarse razonable y proporcionado. Adicionalmente, el artículo cuestionado reconoce el pago por auxilio de cesantía hasta por 30 años, lo que contraviene lo dispuesto recientemente por el Tribunal

Constitucional en la Sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el tanto acude en protección de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese esta resolución al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica en la siguiente dirección: avenida 7, calles 1 y 3, edificio 16. Notifíquese por medio del notificador de este despacho. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./».

San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291161).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015834-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y cuarenta y uno minutos de veintidós de octubre del dos mil dieciocho. / Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Aserrí, por estimarlo contrario a los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio presupuestario. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la

República, al alcalde de la Municipalidad de Aserrí y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San José (SITMUPSAJ). La norma se impugna por cuanto, a juicio del accionante, crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía, regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 50 impugnado –de forma desproporcionada e irracional– dispone que dicho instituto puede ser empleado por aquel trabajador que “deseé dar por concluido su contrato de trabajo, o bien acogerse al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social” (sic). Adicionalmente, aduce que el artículo 50 de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 15 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2018-8882. Asevera que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no

suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./»
San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León

Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291162).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015836-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y treinta y ocho minutos de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declaren inconstitucionales artículos 124 y 125 de la Convención Colectiva del Instituto Nacional de Seguros y el Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines (SICOBO), por estimarlos contrarios a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros y al Secretario General del Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines (SICOBO). Las normas se impugnan en cuanto establecen privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que los ordinales impugnados establecen la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de renuncia por lo que a su parecer se superan los límites de lo que puede considerarse razonable y proporcionado. Adicionalmente, los artículos cuestionados reconocen el pago por auxilio de cesantía hasta por 20 años, lo que contraviene lo dispuesto recientemente por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación al accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el tanto acude en protección de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso dealzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso

la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese esta resolución al Secretario General del Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines (SICOBO), en la siguiente dirección: San José, de la Catedral Metropolitana 200 metros sur, tercer piso de la Estación Central de Bomberos. Notifíquese por medio del notificador de este despacho. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.».

San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,

Secretario a. í.

O. C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291163).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015842-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declare inconstitucional Artículo 119 de la Convención Colectiva del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC), por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y al Secretario de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC). La norma se impugna en cuanto establece privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal impugnado establece la posibilidad del pago de auxilio de cesantía en caso de renuncia, mutuo acuerdo, incapacidad permanente, pensión o muerte por lo que a su parecer se superan los límites de lo que puede considerarse razonable y proporcionado. Adicionalmente, el artículo cuestionado reconoce el pago por auxilio de cesantía hasta por 18 años, lo que contraviene lo dispuesto recientemente por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2018-8882. Afirma que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79.

La legitimación del accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el tanto acude en protección de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Para notificar a: el Secretario General de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la siguiente dirección: sede central del Instituto Tecnológico de Costa Rica se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Cartago, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente./Fernando Castillo Víquez, Presidente a. i.”.

San José, 23 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,

Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291164).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-015845-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas y treinta y siete minutos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. / Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por

Otto Guevara Guth, cédula de identidad N° 1-544-893, para que se declare inconstitucional el artículo 48 de la Convención Colectiva de las y los Trabajados Municipales del Cantón Central de Puntarenas, por estimarlo contrario a los ordinales 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política, así como a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y equilibrio presupuestario. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas y al secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas. La norma se impugna por cuanto, a juicio del accionante, crea privilegios que afectan la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y atentan contra el manejo eficiente y adecuado de los fondos públicos. Explica el accionante que el instituto jurídico del auxilio de cesantía, regulado en el ordinal 63 de la Carta Magna, establece el derecho de indemnizar a un trabajador que es despedido sin una causa justa para tal efecto. Pese a esto, alega que el ordinal 48 impugnado -de forma desproporcionada e irracional- dispone que dicho instituto puede ser empleado en caso de que el trabajador desee dar por terminado su contrato laboral. Adicionalmente, aduce que el artículo 48 de la convención reconoce un tope de cesantía de hasta 15 años, pese a que, en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo, es de 8 años. Afirma que dicho tope contraviene igualmente lo señalado recientemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 2018-8882. Asevera que se está en presencia de un beneficio abusivo, desproporcionado y discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos y privados del país. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa de intereses difusos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *Boletín Judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *Boletín Judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.” “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su

procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas y al secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas, ambos en las oficinas de la Municipalidad de Puntarenas, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Puntarenas, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í./»

San José, 23 de octubre del 2018,

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291165).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la ley de la jurisdicción constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-016397-0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas y dos minutos de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. /se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Claudio Guevara Guth, para que se declaren inconstitucionales los párrafos 1º y 2º del artículo 68 de la Convención Colectiva de JAPDEVA, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63 y 68 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de La República, al Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (en adelante JAPDEVA) y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y afines portuarios (SINTRAJAP). Manifiesta que la norma se impugna en cuanto en cuanto prohija un indebido manejo de fondos públicos, lo que lesiona los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La disposición establece privilegios que afectan el uso de fondos públicos, la buena gestión en la prestación de los servicios públicos y suponen un uso indebido del dinero de los contribuyentes. La norma impugnada establece la posibilidad de pago del auxilio de cesantía en caso de cese de funciones, sea por despido con responsabilidad patronal, renuncia, pensión o fallecimiento. El artículo 63 de la Constitución Política dispone que el pago del auxilio de cesantía solo procede para el caso de despido sin justa causa. La actuación de la administración pública debe realizarse dentro de un marco jurídico determinado y su fuerza de ley le está conferida en tanto se haya acordado con arreglo al ordenamiento jurídico. Por

otra parte, la norma reconoce el pago por auxilio de cesantía hasta por 20 años para unos funcionarios y 15 años para otros, lo cual excede el tope de 12 años, fijado recientemente por la Sala Constitucional en el voto N° 2018-008882. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la ley de la jurisdicción constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación al accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto se trata de la defensa de intereses difusos como es el adecuado manejo de los fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el *boletín judicial* sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la ley de la jurisdicción constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el *boletín judicial*, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el procurador general de la república, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.” Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la ley de jurisdicción constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la sala (Resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Para notificar al presidente ejecutivo de JAPDEVA y al Secretario General de SINTRAJAP se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito Judicial de Limón, Despacho, al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.

San José, 24 de octubre del 2018.

Vernor Perera León

Secretario a. í

O.C. N° 364-12-2017.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(IN2018291166).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 18-016484-0007-CO que promueve alcalde de la Municipalidad de Cañas, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y treinta minutos de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. / Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Fernando Mendoza Jiménez, cédula de identidad No. 5-0199-0796, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cañas, para que se declaren inconstitucionales el Transitorio I del artículo 17 y los ordinales 19, incisos b) y c), 20, 21, 27, inciso g), 28 incisos e) y h), 32, 33, 49, 54, 55, 57, 68, incisos a), b), c), d), e), f) y g), 69, incisos a), b), c), d), e), f) y h), y 73 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Cañas, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63, 68, 74, 105, párrafo primero, 121, inciso primero, 140, incisos 7) y 8), 176, 180, 191 y 192 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República y al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Alega, el accionante, que se interpone la presente acción con sustento en la autorización brindada por el Concejo Municipal, por acuerdo No. 3, adoptado en la sesión ordinaria N° 126- 2018 del 15 de octubre de 2018. Indica que impugna el Transitorio I del artículo 17 de la referida convención en tanto se pretende imponer al Gobierno Local la obligación de crear puestos de trabajo (plazas) y contratar a personas a plazo fijo, sin mayor sustento técnico y obviando los sistemas de ingreso al empleo público. Señala que lo anterior no se corresponde con lo que debe ser el contenido de una norma transitoria y no tiene una fecha de vigencia, lo que genera inseguridad jurídica. Asevera, además, que infringe el principio constitucional de idoneidad comprobada para el acceso a la función pública, en tanto sustituye el procedimiento de concursos para ingreso a la función pública con idoneidad comprobada por el mero transcurrir del tiempo de una persona en una plaza vacante, en contraposición a lo dispuesto en el artículo 192 de la Carta Magna, en relación con el ordinal 128 del Código Municipal. Considera que con esto se infringe también el principio de legalidad (artículo 11 constitucional), ya que se contrapone a lo previsto en el Código Municipal, en el que se instaura la carrera administrativa municipal (artículo 124), se establece que el personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad (artículo 134) y se disponen los parámetros que se requieren para llenar las plazas vacantes en las municipalidades (artículos 137 y 139). Estima que se infringe, asimismo, el principio de legalidad presupuestaria, derivado de los numerales 176 y 180 constitucionales, pues la creación de plazas debe tener siempre sustento en un estudio técnico previo que debe ser sometido ante el Concejo Municipal para su respectiva aprobación y en todo caso debe respetarse las limitaciones impuestas por el ordinal 102 del Código Municipal y 107 de la Ley N° 8131. En cuanto al artículo 19, incisos b) y c), de la referida convención colectiva, se impugnan en tanto se pretende imponer un porcentaje (75%) de personas afectadas, incluso superior al fijado por la Sala Constitucional en su jurisprudencia

(voto No. 13660-2004), para poder ejercer la potestad que ostenta la Administración para realizar procesos de reestructuración, sea, para realizar procesos de reorganización en materia de empleo público con el objeto de lograr un mejor desempeño y organización en los servicios que brinda, con sustento en los artículos 140, inciso 8), y 192 de la Constitución Política, en relación con el numeral 17 del Código Municipal. Añade que la norma impugnada pretende imponerle a la Administración la obligación de realizar una consulta permanente a la ANEP o a la Junta de Relaciones Laborales durante las diversas etapas del proceso de reestructuración, pese que no existe norma legal o principio general-de los que regulan los procesos de reorganización o que informan el régimen de empleo público- que obligue a realizar tal consulta y esta supone una intromisión en el quehacer de la Administración que contraviene los citados artículos 140, inciso 8), y 192 de la Constitución Política, dado que, interfiere con las atribuciones indeclinables de los jefes superiores de la institución. Respecto del artículo 20 de la convención colectiva, considera que la misma prohíba un indebido uso de los fondos públicos, así como una infracción a los principios de igualdad, razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, justicia, moralidad, control efectivo del sano manejo de los fondos públicos, rendición de cuentas y adecuada distribución de la riqueza, según lo dispuesto en los artículos 11, 33, 46, 50, 57, 63, 68 y 74 de la Constitución Política, ya que, permite el pago del preaviso y el auxilio de cesantía para el caso de renuncia del trabajador, lo que supone un exceso en infracción de los principios ya señalados. Alega, al efecto, que el auxilio de cesantía, previsto en el artículo 63 constitucional, procura brindar una reparación parcial al daño patrimonial causado por la finalización de la relación laboral por voluntad ajena al trabajador, no así cuando es el trabajador quien toma la decisión voluntaria de abandonar su trabajo o renunciar a su cargo. Añade que la Sala Constitucional hapreciado en su jurisprudencia que la gestión de los fondos públicos debe sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que impone una prohibición de derrochar o administrar tales fondos como si se tratase de fondos privados. Considera que la norma impugnada excede los parámetros permitidos para la utilización de los institutos jurídicos del preaviso y el auxilio de cesantía y supone un abuso del derecho. A lo que se agrega que la norma reconoce un tope de cesantía de hasta veinte años, lo que considera un privilegio o beneficio injustificado, abusivo, desproporcionado y discriminatorio, en transgresión de los principios de legalidad administrativa y de igualdad. Asevera que procede aplicar en este caso lo previsto en el voto N° 2018-8882 de esta Sala y debe resolverse que en ningún caso se podrá indemnizar por auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de relación laboral según lo previsto en el artículo 29 del Código de Trabajo. Sobre el artículo 21 de la convención colectiva, el accionante acusa que el mismo incurre en similares vicios de inconstitucionalidad que el citado artículo 20, por cuanto, prevé igual indemnización en otros supuestos distintos al despido y con el mismo techo de veinte años. En cuanto al artículo 27, inciso g), de la convención colectiva, el mismo prevé que lo referente a la consideración y resolución de todos los problemas laborales disciplinarios, de clasificación y de seguridad que se presenten en la Municipalidad corresponde analizarlos a la Junta de Relaciones Laborales y mientras se realiza dicho análisis, de forma obligatoria, la Administración debe suspender los plazos de ley para ejercer sus potestades. Considera que esto infringe el principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) y supone desaplicar el artículo 148 de la Ley

General de la Administración Pública. En el caso del artículo 28, inciso e), de la convención colectiva, tal normativa prevé que cuando se comunique a una persona trabajadora el propósito de despido se le concederá un día de permiso con goce de salario para la preparación de su descargo. Considera que el otorgamiento de tal permiso no guarda conexión con la prestación personal del servicio, no se corresponde con la consecución de un fin público e implica una inadecuada gestión financiera, en infracción del artículo 11 de la Constitución Política, en relación con los ordinales 2 y 3 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 11 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 8 de la Ley General de Control Interno. Añade que el inciso h) del citado artículo 28 establece que se debe permitir a una Junta de Relaciones Laborales, que se crea ex lege, suspender la potestad disciplinaria de la Administración y exigirle plazos que harán nugatoria la capacidad de disciplinar. Considera que con esto se infringe el principio constitucional de legalidad. Afirma que el artículo 32 de la convención colectiva establece que la Junta de Relaciones Laborales deberá desarrollar una política sostenida de prevención del hostigamiento sexual y laboral. Argumenta, al efecto, que este tipo de juntas –creadas vía convención colectiva- no pueden dispensar la Constitución, leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, incluidas entre aquellas las disposiciones de carácter imperativo que otorguen o regulen competencias indeclinables o indispensables de los entes y órganos públicos; en cuyo caso, la norma impugnada pretende otorgar a la junta la atribución de elaborar políticas en un tema que, según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 7476, es responsabilidad de la Administración. Por lo que considera que tal norma también infringe el principio constitucional de legalidad. Acusa que similar vicio de inconstitucionalidad se configura respecto del artículo 33 de la convención. Afirma que el artículo 49 de la convención establece la forma en que deben aumentarse los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad y, en tal sentido, se obliga a la Administración a realizar erogaciones por encima del IPC, cuando es deber de la Municipalidad la correcta administración de los recursos financieros del sector público, orientándola a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. El principio de legalidad financiera, consecuente con lo dispuesto en el artículo 140, inciso 7), de la Constitución Política, prohíbe el uso no autorizado de los recursos públicos con la mera discrecionalidad de la Administración Pública. En lo referente a los aumentos salariales, debe ser la ley la que establezca de qué manera puede disponerse de los recursos financieros del Estado. El aumento previsto en la norma impugnada deviene en desproporcionado y se aparta del principio de gestión financiera, en tanto somete al Gobierno Local a gastos insostenibles en el tiempo con evidente detrimento en el servicio público que se debe prestar. Sostiene que la norma impugnada implica una utilización de recursos del municipio más allá de lo que permite el artículo 102 del Código Municipal. Señala que la determinación de la escala salarial para el régimen municipal es una competencia que forma parte de la autonomía municipal y debe responder a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, con sustento en los respectivos estudios técnicos; sin embargo, la norma impugnada dispone un aumento salarial carente de todo fundamento o criterio técnico. Acusa, además, que el artículo 54 de la convención dispone que la Municipalidad se compromete a establecer una póliza colectiva de vida para todos sus trabajadores y trabajadoras, lo que resulta inconstitucional en atención al

criterio jurisprudencia ya vertido por esta Sala en los votos Nos. 07261-2006 y 01227-2014. Agrega que el artículo 55 de la convención colectiva prevé que los montos correspondientes a incapacidades de la CCSS o el INS serán pagados directamente por la Municipalidad, asegurándose que los trabajadores y trabajadoras siempre reciban el salario completo, así como garantizándose que el salario sea devengado en un cien por ciento. Argumenta que los conceptos de salario y subsidio no son de ningún modo equiparables y, por ende, el procedimiento de cancelar como salario un subsidio, como así lo establece la norma cuestionada, impone una práctica administrativa que no está autorizada por el bloque de legalidad. Sostiene que el artículo 57 prevé una serie de criterios para la selección de personal que considera arbitrarios y que no obedecen a criterios modernos de gestión de personal, sino que privilegian la contratación de personas por antigüedad, dejando de lado la idoneidad comprobada, en contradicción con los artículos 192 constitucional y 134 y siguientes del Código Municipal. Incluso, se crean mecanismos como entrevistas sin sustento técnico, a las cuales se les otorga un valor, obviando el procedimiento establecido en el Código Municipal (artículos 134 y siguientes). El artículo 68 de la convención colectiva, en sus incisos a), b)-en el caso de abuelos y abuelas-, c), d), e), f) y g), prevé el otorgamiento de permiso con goce de salario en distintos supuestos, pese que el artículo 153 del Código Municipal ya establece en cuales casos proceden tales permisos. Argumenta que los permisos no comprendidos en esa norma legal resultan inconstitucionales, en tanto se desaplicó una norma legislativa para buscar el favorecimiento de un mínimo grupo de personas. Se crean nuevos permisos con goce de salario sin un motivo legítimo para que la Municipalidad destine recursos públicos para su pago (principio de indisponibilidad de los recursos públicos). Suponen un privilegio irrazonable y una afectación al servicio público, al otorgarse tales permisos más allá de plazos razonables y por situaciones no previstas por el legislador. Acusa que se configura igual vicio de inconstitucionalidad respecto del artículo 69 constitucional, en sus incisos a), b), c), d), e), f) y h). Señala, finalmente, que el artículo 73 de la convención colectiva establece que la Municipalidad se obliga a defender, a través de su Asesoría Legal, a todos los trabajadores y trabajadoras que conduzcan vehículos propiedad de la institución, en caso de accidentes que ocurran al trabajador o la trabajadora o a sus ocupantes. Asevera que, conforme a la jurisprudencia vinculante de la Procuraduría General de la República, las asesorías jurídicas de las instituciones públicas en general no están habilitadas legalmente para representar en sede jurisdiccional a los funcionarios de dichas carteras que sean demandados en lo personal por conductas administrativas en que participen directa o indirectamente en el cumplimiento de sus funciones y que sean objeto del proceso. Señala que, en consecuencia, tal norma debe declararse inconstitucional en apego al bloque de legalidad y a la correcta disposición de los recursos públicos. Argumenta que, en general, las distintas normas impugnadas resultan inconstitucionales, en tanto que los habitantes del Cantón de Cañas no deben sufragar una serie de privilegios injustificados, ajenos a la satisfacción de los fines públicos asignados a la Municipalidad de Cañas y que suponen una indebida gestión de los recursos o fondos públicos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se apersona en defensa del debido uso de los recursos públicos y de la autonomía municipal. Publíquese

por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente a.i./.”

San José, 24 de octubre del 2018.

Vernor Perera León,
Secretario a. í.

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(IN2018291167).